

Estrategas y fariseos

JOSÉ LUIS DE VILLALONGA

Ya está bien de tanta mojigatez, de tanto escándalo farisaico, de tanta cobardía moral. Cierto es que vivimos desde hace meses inmersos en un mar de burdas mentiras y que las mentiras resultan muy peligrosas cuando acaban creyéndoselas sus propios autores. Hay incluso, ahora, hipócritas que lo son de buena fe.

Todavía recuerdo los tiempos —fue ayer— en que muchas de las gentes que hoy hacen aspavientos se felicitaban al enterarse de tal o cual atentado cometido por los GAL. "¡Has visto qué tíos! ¡Se han cargado a dos de esos cabrones en el sur de Francia!" Nadie hablaba por aquel entonces —repito que fue ayer— de guerra sucia, quizá porque todavía teníamos muy presentes los ejemplos de varios países europeos que hicieron terrorismo de Estado sin parar en mientes.

Cuando el general De Gaulle quiso acabar con los últimos cabecillas del OAS, pagó sin vacilar a los mafiosos de Marsella un millón de francos por cabeza entregada. En unos pocos meses, el OAS dejó de existir y a ningún francés se le ocurrió pedir el procesamiento del general acusándole de asesinato. Los alemanes tampoco calzaron guantes blancos para poner punto final a la banda Baader-Meinhoff. Cuando la prensa anunció que los terroristas se habían suicidado en la cárcel —los unos ahorcándose, los otros pegándose un tiro en la nuca— ningún alemán sintió rubor suspirar de alivio. En cuanto a las Brigadas Rojas italianas, recuerdo que fueron aniquilados sin que a nadie le importaran los métodos empleados y sin que a ningún intelectual se le ocurriera vaticinar un retorno a la moral fascista. Tampoco es probable que las actuaciones del ejército británico, enfrentado a los terroristas irlandeses, se citen nunca en un manual de buenas maneras.

Pero nosotros, los españoles, somos tan exquisitos, tan humanos, tan democráticos, que se nos abren las carnes al enterarnos de que a los pobrecitos etarras el Estado les viene haciendo una guerra sucia desde hace años. Algunos hay que piensan que a los etarras, tan nobles ellos .tan patriotas hay que mimarlos en las cárceles, hay que reinsertarlos en esa sociedad que pretenden destruir y, sobre todo, hay que olvidar sus crímenes, tan limpiamente cometidos. Y si además, para tenerlos contentos hay que acusar de asesinato al propio presidente del Gobierno, pues se le procesa por ello y santas pascuas. En eso anda el juez Garzón, encarcelando, con la colaboración de los siniestros Amedo y Domínguez, a muchos de aquellos que se dejaron la piel en defensa del Estado. El juez Garzón creyó que un día sentaría sus importantes posaderas en el sillón del ministro de Justicia, cuando no en el de Interior. Pero el César que nos gobierna prefirió concederle ambos ministerios a Juan Alberto Belloch, su certero Rasputín, dejando al juez Garzón con el culo al aire. Desde entonces, el orondo juez sueña —el mismo sueño tienen los etarras— con meter en la cárcel a Felipe González. importándole muy poco dañar gravemente la imagen de España en el resto de Europa.

En agosto del 94 publiqué en esta misma página una crónica en la que aseguraba que se estaba fraguando una confabulación para desestabilizar en profundidad al Gobierno de la nación. Anuncié una campaña que atacaría sin tregua a Felipe González y el vicepresidente Serra a la vez que se ensalzaba la figura de José María Aznar, "un hombre que durará en el poder el tiempo que nosotros queramos que dure", según palabras de uno de los conjurados. "Con

cuidada sincronía —escribí—, se irán filtrando pequeñas y breves noticias en detrimento del Rey.”

Afirmé que la campaña sería financiada en parte por Mario Conde y que “*El Mundo*” orquestaría la operación. Si dicha campaña tuviera éxito y se consiguiera derrocar a la monarquía, se implantaría una república presidida por el inefable García Trevijano, ex notario y hombre de negocios de detestable reputación. Naturalmente, se revolvieron contra mí como perros furiosos, lo que me dio a entender que no me faltaba razón, y que mis informaciones eran exactas.

Pocos meses después, a Narcís Serra se le acusó de haber pagado con fondos reservados del Estado el informe Crillon sobre las actuaciones delictivas de Mario Conde al frente de Banesto. A Felipe González se le acusa ahora —sin otras pruebas que la palabra de García Damborenea, deleznable chaquetero al servicio del PP— de ser el señor “X”, fundador de los GAL. La guinda del pastel la constituyeron las grabaciones telefónicas, robadas por el coronel Perote en el Cesid, compradas y filtradas a “*El Mundo*” por Mario Conde, en las que, por—pura casualidad—, se escuchan conversaciones de su Majestad el Rey con algunos hombres de negocios amigos suyos. Se va, pues, comprobando poco a poco todo lo que escribí en el mes de agosto pasado.

¿A quién le interesa desacreditar al Rey? Obviamente, a la derecha, porque la derecha abomina de la democracia y siendo la Corona la gran valedora de nuestra democracia, resulta ser un estorbo que conviene eliminar sea como sea.

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad —un hombre que me merece un respeto por la dignidad con que ha llevado su encarcelamiento— le ha dicho a Esther Esteban, corresponsal de “*Tribuna*”:—Yo tengo informaciones ciertas de que aquí hay gente que quiere acabar con la monarquía. Sólo hay que leer determinadas informaciones para darse cuenta de que ha habido intentos serios para derrocarla. Empiezan desprestigiándole al Rey y seguidamente intentarán desprestigiar a la institución monárquica. Hay mucha gente que tiene prisa por llegar al poder al margen de los partidos políticos y, para sus intenciones, la monarquía es un estorbo”. ¿Desprestigiar al Rey? Se le inventa lo que sea, un hijo natural, un negocio sucio, un talante poco afín con la soberanía popular. En eso andan Mario Conde y Javier de la Rosa para vengarse de quien no les echó una mano cuando estaban en la cárcel. En eso andan aquellos que quieren vender más papel. El país no les importa nada. Los facinerosos no tienen patria. Sólo tienen oficinas donde cocinar la caída de unos para que suban otros. De preferencia, ellos.

La Vanguardia, 7 de agosto de 1995